**JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VALENCIA**

Procedimiento Ordinario 535/19

SENTENCIA nº 300/2021

En Valencia, a 7 de septiembre de 2021

Visto por Laura Alabau Martí, Magistrado-Juez en funciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valencia, los autos del Procedimiento Ordinario seguido a instancia de [REDACTED], Procurador de los Tribunales en nombre y representación de [REDACTED], bajo la dirección letrada de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contra Diputación de Valencia, representada y defendida por [REDACTED], Letrado de sus SSJJ, siendo codemandado Ayuntamiento de Godelleta, representado por [REDACTED] Procurador de los Tribunales bajo la dirección de [REDACTED], Letrado, en impugnación de la resolución de 18 de julio de 2019 por la que se confirma en reposición diligencia de embargo relativa a liquidación derivada de sanción urbanística, procede dictar sentencia en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por la citada recurrente se interpuso recurso terminando con la solicitud de que se admitiera el recurso, se recabara el expediente administrativo, se emplazara al demandado, y una vez presentado se le diera traslado y plazo para formular demanda.

SEGUNDO. Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo al demandado, recabándose al propio tiempo el expediente administrativo, que tras ser remitido se puso de manifiesto al actor, y formulada por éste la oportuna demanda, expuestos los hechos y fundamentos de derecho terminó por suplicar: se declare nula la citada resolución y el expediente ejecutivo 2017/20561-EJE al estar reclamando el pago por vía de apremio de una sanción urbanística que es nula de pleno derecho. Declarar nulo el expediente PLU/SU 18/2010 del Ayuntamiento de Godelleta instruido por sanción por infracción urbanística, al haber sido declarada nula la resolución que resolvía el expediente por infracción urbanística instruido contra la actora por el citado Ayuntamiento, dado que el expediente sancionador se inició como consecuencia de la terminación del de infracción. Dado traslado de la demanda al demandado, se opuso contestando a la demanda en los términos que obran en su escrito. Asimismo se personó y opuso a la demanda el Ayuntamiento codemandado.

TERCERO. Recibido el procedimiento a prueba, fue propuesta y practicada con el resultado que obra en autos, consistente en documental y tras formular las partes sus conclusiones por escrito, fue declarado concluso para sentencia.

CUARTO. En la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La competencia de este Juzgado resulta de lo dispuesto en el art. 8.1 LRJCA por tratarse de un acto procedente de la Administración Local. En cuanto al procedimiento, se ha estado a lo dispuesto en los arts. 45 y concordantes para el procedimiento ordinario a tenor de su cuantía.

SEGUNDO. 1. La parte actora sostiene en su demanda que el expediente ejecutivo 2017/20561 EJE se instruyó por una multa por infracción urbanística, que considera tuvo que ser declarada nula de oficio. El procedimiento por infracción urbanística tuvo que ser declarado nulo conforme a lo ordenado por sentencia del Juzgado de lo contencioso nº 9 de fecha 10 de julio de 2012, que anuló el decreto de Alcaldía de 29 de julio de 2010 por el que se ordenaba a demolición de las obras consistentes en vivienda de 142 m², terraza de 24 m² y paellero de 5 m², confirmada por STSJCV de 2 de marzo de 2017.

Habida cuenta que la nulidad del decreto de Alcaldía que sirve de sustento para la iniciación del expediente sancionador produce efectos *ex tunc*, el Ayuntamiento debió declarar nulas todas las resoluciones acordadas con posterioridad a este acto, incluidas las del expediente sancionador iniciado e instruido a consecuencia de dicha infracción. Si no hay infracción, difícilmente se puede sancionar por dicha infracción.

En sus fundamentos, cita los arts. 47 y 49 LPACAP.

2. Por la Diputación se opuso manifestando que en virtud de convenio de colaboración en materia tributaria le fue remitida por el Ayuntamiento de Godelleta la liquidación de multa por infracción urbanística por importe de 38.452,91 €, con referencia de recaudación 14801825, teniendo encomendado únicamente el cobro en vía ejecutiva, y habiendo sido notificada la liquidación por el Ayuntamiento en fecha 16 de enero de 2015, se dictó providencia de apremio de 5 de mayo de 2015, notificada en 26 de mayo. Interpuesto recurso de reposición, se desestimó por resolución de 29 de noviembre de 2016, al considerar que la resolución por la que se impone sanción había devenido firme, al no interponer frente a la misma recurso alguno. Tampoco se interpuso recurso contra la resolución de reposición en vía de apremio.

A continuación se dictó diligencia de embargo de fecha 2 de febrero de 2019, contra la que se interpone recurso de reposición, por los mismos motivos, siendo desestimado mediante resolución aquí recurrida.

Han sido seguidos dos expedientes contra la parte actora: de restauración de la legalidad por la que se ordenaba demolición de unas obras, EXP PLU 18/10, que concluyó con sentencias favorables a la parte actora, y sanción por infracción grave en materia urbanística, recayendo resolución de Alcaldía de 17 de septiembre de 2013, notificada en 25 de septiembre, frente a la que no interpuso la parte recurso

alguno, sino ya en vía ejecutiva.

En sus fundamentos alega la presencia de dos expedientes, la confusión de la parte respecto de ambos, la legalidad de la diligencia al no concurrir ninguno de los motivos del art. 170 LGT, y extemporaneidad de los motivos alegados, al haber consentido la resolución sancionadora.

3. Por el Ayuntamiento de Godolleta se opuso en considerar la firmeza de la liquidación de que trae causa la diligencia de embargo, confirmada mediante providencia de la Diputación en reposición.

Como antecedentes, refiere la incoación de dos expedientes, habiendo acordado la suspensión del procedimiento sancionador PLU/SU 18/10 y del expediente de restauración que le precedió PLU 18/10, para su remisión a la Fiscalía por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, dictándose finalmente auto de archivo por el Juzgado de Instrucción de Requena, DP 76/11. Por decreto de Alcaldía de 10 de enero de 2013 se ordenó la continuación del procedimiento sancionador, notificándose a la interesada la resolución sancionadora de 17 de septiembre de 2013, acto consentido. La parte actora confunde ambos expedientes, de restauración y sancionador, ya que interpuso recurso contra la resolución recaída en el primero, de fecha 29 de julio de 2010, y no en el segundo. Las alegaciones de la parte actora respecto a su solicitud de ejecución de sentencia ante el Juzgado nº 9 nada aportan, pues no consta la respuesta de dicho Juzgado. La resolución sancionadora es firme y no concurre motivo alguno de nulidad.

TERCERO. El art. 170 LGT dispone: *3. Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:*

a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Falta de notificación de la providencia de apremio.

c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.

d) Suspensión del procedimiento de recaudación.

La parte actora centra sus argumentos en la presunta nulidad de la resolución sancionadora, que vendría predeterminada por sentencia firme del Juzgado nº 9 de lo contencioso, sin embargo, tales argumentos debieron dirigirse contra la propia resolución de fecha 17 de septiembre de 2013, que fue notificada a la actora en fecha 25 de septiembre de 2013 como consta al folio 76 vuelto del expediente, contra la que no interpuso recurso alguno.

El reglado margen de recurso que el precepto transcrito confiere a la vía de apremio, en este caso además, contra diligencia de embargo, ya que el recurso contra la providencia de apremio se ha seguido aparte, se circunscribe a los elementos allí previstos, respecto de los que nada argumenta la parte actora.

En todo caso, no concurren tales circunstancias pues según admite la propia recurrente en su escrito de recurso a la anterior al folio 78, le fue notificada providencia de apremio en fecha 26 de mayo de 2015, sin que concurra prescripción en la vía ejecutiva, es decir, "prescripción del derecho a exigir el pago".

La prescripción a que se refiere la parte actora, apreciada para la vía penal en auto obrante al folio 40, y en STSJCVC de 2 de marzo de 2017, que confirma la de instancia, debió oponerla en recurso contra la resolución sancionadora, que no cabe ser reexaminada aquí, al haber sido consentida por la parte actora.

Se desestima el recurso.

CUARTO. Conforme al art. 139 LRJCA se impone las costas al recurrente si bien por un máximo de 600 € por todos los conceptos.

VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación.

FALLO

Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por [REDACTED], Procurador de los Tribunales en nombre y representación de [REDACTED], bajo la dirección letrada de [REDACTED] [REDACTED] contra Diputación de Valencia, representada y defendida por [REDACTED], Letrado de sus SSJJ, siendo codemandado Ayuntamiento de Godelleta, representado por [REDACTED] Procurador de los Tribunales bajo la dirección de [REDACTED], Letrado, contra la resolución a que se refiere el encabezamiento, declarando que la misma es conforme a Derecho.

Con imposición de costas a la parte recurrente en los términos del fundamento anterior.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de QUINCE días en este Juzgado, para su conocimiento por la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Ilmo/a Sr/Sra. Magistrado/a D/D^a LAURA ALABAU MARTI estando celebrando audiencia pública, en la que como Letrado/a A. Justicia del mismo, certifico.